

INTREPID MINERALS CORPORATION

**PROYECTO CASPOSO
INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL
ETAPA DE EXPLOTACIÓN**

**SECCIÓN 8.0 – NORMAS CONSULTADAS
(Ref. No. SA202-0133/1-4)**

Preparado para:

Intrepid Minerals Corporation

Knight Piésold Argentina Consultores S.A.

25 de Mayo 234 (Oeste)-Capital San Juan, Argentina

Fono: 0054-262-421 0014

E-mail: sanjuan@knightpiesold.com

Knight Piésold
CONSULTING

INTREPID MINERALS CORPORATION

**PROYECTO CASPOSO
INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL
ETAPA DE EXPLOTACIÓN**

**SECCIÓN 8.0 – NORMAS CONSULTADAS
(Ref. No. SA202-0133/1-4)**

TABLA DE CONTENIDO

SECCIÓN 8.0 - NORMAS CONSULTADAS	1
8.1 RÉGIMEN JURÍDICO NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL	
PROYECTO CASPOSO	2
8.1.1 Bases Constitucionales	2
8.1.1.1 Constitución Nacional de la República Argentina	2
8.1.1.2 Constitución de la Provincia de San Juan de 1986	2
8.1.2 Legislación Ambiental de Carácter General	3
8.1.2.1 Ley Nacional N° 25.675, Política Ambiental Nacional – Presupuestos Mínimos para la Gestión Sustentable y Decreto Nacional N° 2.413/2000	3
8.1.2.2 Ley Provincial N° 6.634, General del Ambiente - Principios Rectores para la Preservación, Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente Provincial	6
8.1.2.3 Ley Provincial N° 6.006, para la Defensa Judicial de los Intereses Difusos y Derechos Colectivos.	8
8.1.2.4 Ley Provincial N° 6.571, Evaluación del Impacto Ambiental, modificada por Ley Provincial N° 6.800	8
8.1.2.5 Ley Provincial N° 7.620/05	9
8.1.2.6 Ley Provincial N° 7.687/06	9
8.1.2.7 Ley Nacional N° 25.831, Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental	9
8.1.2.8 Ley Provincial N° 2.553, Denominada Código Sanitario	10
8.1.2.9 Ley Nacional N° 18.284, Código Alimentario Argentino, y su Decreto Reglamentario N° 2.126/1971	10
8.1.3 Legislación de Carácter General Aplicable a la Minería	11
8.1.3.1 Ley 24.196, Ley de Inversiones Mineras, Decreto Reglamentario N° 2.686/1994 y Modificatorias	11
8.1.3.2 Ley Nacional N° 24.228, Acuerdo Federal Minero y Ley Provincial de Adhesión N° 6.174	12

8.1.3.3	Ley Provincial N° 7.281/02. Ley de Regalías de la Provincia de San Juan.	13
8.1.3.4	Código de Minería, Ley Nacional N° 24.585. Decreto Provincial N° 1.426/1996 y Código de Procedimientos Mineros, Ley N° 7199, Provincia de San Juan	13
8.1.3.5	Decreto N° 1679/2006, Provincia de San Juan, Reglamento para la Protección Ambiental en la Etapa de Explotación de los Pequeños y Medianos Emprendimientos Mineros.	16
8.1.4	Legislación Relacionada con la Conservación y Manejo de los recursos Hídricos	16
8.1.4.1	Ley Nacional N° 25.688, Régimen de Gestión Ambiental de Aguas	16
8.1.4.2	Ley Provincial N° 4.392, Denominada Código de Aguas, Modificada por Ley N° 4526/79.	17
8.1.4.3	Ley Provincial N° 5.824, sobre la Preservación de los Recursos de Agua, Suelo y Aire y Control de la Contaminación en la Provincia de San Juan, Decreto Provincial N° 638/1989 y el Decreto Modificatorio de la Reglamentación de la Ley, Decreto N° 2107-MiyT-06; Acta No. 2489, Punto 9.	19
8.1.5	Legislación Relacionada a la Protección de los Recursos Patrimoniales	20
8.1.5.1	Ley Nacional N° 25.743 Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico y Decreto Reglamentario N° 1.022/2004	20
8.1.5.2	Ley Provincial N° 6.801, Ley Marco sobre el Patrimonio Histórico Cultural y Decreto Provincial Reglamentario N° 1.134/2001	20
8.1.6	Legislación Relacionada a la Protección de la Flora y Fauna	22
8.1.6.1	Ley Nacional N° 22.421, de Protección y Conservación de la Fauna Silvestre y su Decreto Reglamentario N° 666/1997. Ley Provincial N° 6.911, sobre la Flora y Fauna Silvestre	22
8.1.6.2	Ley Nacional N° 22.344, Aprueba Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, y Decreto Nacional N° 522/97 Decreto Reglamentario-Comercio Exterior-Protección de la Flora y Fauna Silvestre	22
8.1.6.3	Ley Nacional N° 22.351, sobre Parques y Reservas Nacionales y Monumentos Naturales	23

8.1.6.4	Ley Provincial N° 6.911, sobre la Flora y Fauna Silvestre	23
8.1.6.5	Ley Provincial N° 6.912	24
8.1.7	Legislación Ambiental Relacionada a la Infraestructura Requerida	24
8.1.7.1	Ley Nacional N° 13.660, Dicta Normas a que Deberán Ajustarse las Instalaciones de Elaboración, Transformación y Almacenamiento de Combustibles, Decreto Reglamentario N° 10.887 y Decreto Nacional N° 1.212/1989	24
8.1.7.2	Resolución N° 1102/04 de la Secretaría de Energía	25
8.1.7.3	Resolución N° 404/1994 de la Secretaría de Energía	26
8.1.7.4	Ley Nacional N° 20.429, Ley Nacional de Armas y Explosivos – Sustitución de la Ley N° 13.945. Decreto Reglamentario Parcial N° 302/1983, sobre Reglamentación Parcial de Pólvoras, Explosivos y Afines	26
8.1.7.5	Ley Nacional N° 24.449, Ley de Tránsito, y Decreto Nacional Reglamentario N° 779/1995, Resolución Nacional N° 195/1997. Ley Provincial de Adhesión N° 6.684, Decreto Provincial Reglamentario N° 326/1997 y demás normas reglamentarias	27
8.1.7.6	Decreto N° 1.544-MOSP y MA/2002, sobre Seguridad y Control de Presas	28
8.1.7.7	Ley Nacional N° 19.587, de Higiene y Seguridad en el Trabajo y el Reglamento Complementario, Decreto N° 351/1979 y sus modificatorias	29
8.1.7.8	Ley Nacional N° 24.557/95 sobre Riesgos del Trabajo.	30
8.1.8	Legislación Ambiental Relacionada al Manejo de Residuos	30
8.1.8.1	Ley Nacional N° 25.612, sobre Gestión Integral de Residuos Industriales y de Actividades de Servicios y Decreto Nacional N° 1.343/2002, de Promulgación Parcial de la Ley	30
8.1.8.2	Ley Nacional N° 25.916, sobre Gestión de Residuos Domiciliarios y Decreto Nacional N° 1.158/2004, de Promulgación Parcial de la Ley	32
8.1.8.3	Ley Nacional N° 23.992, Ratificación del Convenio de Basilea	33
8.1.8.4	Ley Nacional N° 25.670, Presupuestos Mínimos Para La Gestión y Eliminación de los P.C.B.	34

8.1.8.5	Ley Nacional N° 24.051, sobre Residuos Peligrosos y Decreto Reglamentario Nacional N° 831/1993. Ley Provincial de Adhesión N° 6.665	34
8.1.8.6	Ley Provincial N° 7.375, modificada por Ley Provincial N° 7.396, sobre Residuos Sólidos y Urbanos, Vertederos Controlados	36
8.1.9	Legislación Relacionada al Manejo de Contingencias	37
8.1.9.1	Ley Provincial N° 6.837, y modificatoria Ley Provincial N° 6904. Decreto Reglamentario N° 1476-MG-2000, sobre Régimen de Defensa Civil en coincidencia con lo establecido en la Ley Nacional N° 24.059 y normas reglamentarias de Seguridad Interior	37
8.1.9.2	Ley Provincial N° 7.055. Aprobación del Convenio Marco de Asistencia y Cooperación Recíproca entre El Gobierno de la Provincia de San Juan y Gendarmería Nacional - Agrupación X San Juan	38
8.2	Criterios o Estándares Técnicos Aplicables al Proyecto	39
8.2.1	Calidad del Aire y Emisiones	39
8.2.2	Recursos Hídricos	39
8.2.3	Calidad del Suelo	39
8.2.4	Hábitat, Flora y Fauna	39
8.2.5	Recursos Patrimoniales	40
8.2.6	Ruido y Vibraciones	40
8.2.7	Residuos Sólidos	40

TABLAS

Tabla 8.1	Estándares y Guías de Calidad del Aire Ambiental, $\mu\text{g} / \text{m}^3\text{N}$
Tabla 8.2	Estándares de Emisiones Gaseosas
Tabla 8.3	Niveles Guía de Calidad de Aire Ambiental
Tabla 8.4	Niveles Guía de Calidad de Agua Según su Uso, conforme a Decreto N° 1426/96
Tabla 8.5	Normas de Efluentes Domésticos, Industriales y Mineros, con Descarga a Cuerpos Receptores de la Provincia de San Juan
Tabla 8.6	Niveles Guía de Calidad de Suelos Según su Uso
Tabla 8.7	Criterio de Referencia para el Ruido por Tránsito de Vehículos
Tabla 8.8	Valores Guía Máximos para Velocidad de Partícula

**INTREPID MINERALS CORPORATION
PROYECTO CASPOSO
INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL
ETAPA DE EXPLOTACIÓN**

SECCIÓN 8.0 - NORMAS CONSULTADAS

Conforme a lo dispuesto en las Normas Complementarias para la Implementación de la Ley N° 24.585 de Protección Ambiental para la Actividad Minera, Presupuestos Mínimos, aprobadas por Decreto Provincial N° 1.426-MPI y MA-1996, en su Anexo III, punto VIII, a continuación se identifica y describe la normativa y/o criterios provinciales, nacionales e internacionales observados y consultados para la preparación del Informe de Impacto Ambiental.

El desarrollo del documento se ha ordenado conforme a la siguiente estructura. La primera sección contiene, ordena o aborda las normas consultadas en relación con la legislación nacional, provincial y municipal identificada y aplicable al proyecto. La segunda, contiene los estándares, criterios o recomendaciones nacionales, provinciales o internacionales consultados y revisados en relación a la faena minera en evaluación.

Lo anterior ha permitido abordar los diversos aspectos relacionados con el impacto que la actividad genera en el entorno, tales como aire, agua, suelo, flora y fauna, hábitat, e infraestructura.

Las normas incluidas a continuación, corresponden a aquellas que, de conformidad con la Ley de Protección Ambiental para la Actividad Minera y su Reglamento, han sido consultadas o tenidas a la vista al momento de elaborar el presente Informe de Impacto Ambiental, sin que ello signifique necesariamente que tales normas resultan aplicables al Proyecto Casposo. Cuando esto último ocurre, sus contenidos han sido incorporados en los distintos capítulos del Informe; por el contrario, cuando luego de analizadas las normas se ha llegado a la conclusión de que algunas de ellas no son aplicables al Proyecto, simplemente se han desestimado.

8.1 RÉGIMEN JURÍDICO NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL PROYECTO CASPOSO

8.1.1 Bases Constitucionales

8.1.1.1 Constitución Nacional de la República Argentina

El Art. 41 de la Constitución Nacional expresa: *“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo...”* *“Las Autoridades proveerán a la protección de ese derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.*

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales....”

La Constitución Nacional Argentina otorga a todos los habitantes el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las generaciones futuras, a raíz de lo cual tienen el deber de preservar el medio ambiente.

Por su parte, corresponde al Estado y a sus autoridades promover las condiciones necesarias para la protección de este derecho. En particular, nos interesa destacar que corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales, (Artículo 41° Constitución Nacional). Estableciendo nuestra norma fundamental el principio de que el daño ambiental generará la prioritaria obligación de recomponer.

Finalmente, cabe destacar dos elementos específicos de protección que define la Constitución Argentina, en primer término prohíbe el ingreso de residuos actual o potencialmente peligrosos al territorio argentino y, en segundo término, legisla una acción de amparo cuya finalidad es poner fin a cualquier acto u omisión de autoridades o particulares que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta los derechos y garantías que reconoce la Constitución, entre éstos el derecho a un ambiente sano y equilibrado.

8.1.1.2 Constitución de la Provincia de San Juan de 1986

Conforme al Artículo 58° de la Constitución Provincial, y en forma concordante con la Constitución Nacional, los habitantes de la provincia tienen derecho a una vida

salubre y ecológicamente equilibrada. Para la protección de este derecho, otorga a toda persona la acción de amparo para la cesación de las causas que generan la perturbación del derecho. Como contrapartida, toda persona tiene la obligación de conservar el entorno.

Por su parte es obligación del Estado prevenir y controlar la contaminación y sus efectos. Asimismo, está obligado a promover la mejora progresiva y acelerada de la calidad de vida de todos sus habitantes.

El texto del Artículo 58° de la Constitución de la Provincia de San Juan se complementa con otras normas, que si bien no se refieren autónomamente al medio ambiente, están destinadas a garantizar otros derechos que no le son ajenos: Artículo 61° derecho a la salud; Artículo 113° dominio de los recursos naturales; Artículo 114° función de la tierra; Artículo 116° promoción de la forestación; Artículo 117° régimen de aguas y Artículos 118°, 119° y 120° administración de los recursos hídricos.

8.1.2 Legislación Ambiental de Carácter General

8.1.2.1 Ley Nacional N° 25.675, Política Ambiental Nacional – Presupuestos

Mínimos para la Gestión Sustentable y Decreto Nacional N° 2.413/2000

Ley Nacional N° 25.675: Boletín Oficial 28 de Noviembre del 2002.

Decreto Nacional N° 2.413/2000: Boletín Oficial 27 de Noviembre del 2002.

Esta ley establece los presupuestos mínimos en base a los cuales se ordenará la gestión ambiental del Estado Argentino y la aplicación e interpretación de las normas ambientales vigentes, en cuanto éstas no fueren contrarias a las disposiciones contenidas en la ley.

En consecuencia, la relevancia de esta norma más que la aplicación directa al proyecto minero Casposo, está dada porque la aplicación e interpretación del ordenamiento jurídico ambiental debe entenderse en función de los contenidos mínimos que ésta dispone. Es justamente en este sentido que se ha considerado la presente norma en este capítulo, la cual fuera legislada en virtud del mandato constitucional del Artículo 41° de la Constitución Nacional.

Considerando el carácter general de esta ley, el legislador ha establecido como bien jurídico protegido las bases mínimas necesarias para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable, en todo el territorio de la República. A esta ley, de carácter general, debe adecuarse la legislación en materia ambiental, a nivel nacional, provincial y municipal.

Es decir, que la Nación dictó las normas que establecen los presupuestos mínimos de protección ambiental y las Provincias deben dictar las normas necesarias para complementarlas. Rige el principio de complementación entre provincias y Nación.

Destacamos en tal sentido, que las disposiciones de esta ley, conforme lo establece su Artículo 3° son de orden público y se utilizarán para la interpretación y aplicación de la legislación específica sobre la materia.

La ley bajo análisis dispone, que los objetivos de la política ambiental son:

- a) Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la realización de las diferentes actividades antrópicas;
- b) Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, en forma prioritaria;
- c) Fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión;
- d) Promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales;
- e) Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos;
- f) Asegurar la conservación de la diversidad biológica;
- g) Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas generan sobre el ambiente para posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo;
- h) Promover cambios en los valores y conductas sociales que posibiliten el desarrollo sustentable, a través de una educación ambiental, tanto en el sistema formal como en el no formal;
- i) Organizar e integrar la información ambiental y asegurar el libre acceso de la población a la misma;
- j) Establecer un sistema federal de coordinación interjurisdiccional, para la implementación de políticas ambientales de escala nacional y regional;
- k) Establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de riesgos ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias ambientales y para la recomposición de los daños causados por la contaminación ambiental.

En concordancia con los objetivos de la política ambiental, la interpretación y aplicación de la ley se sujetará a los siguientes principios formativos:

- Principio de congruencia
- Principio de prevención
- Principio precautorio
- Principio de equidad intergeneracional

- Principio de progresividad
- Principio de responsabilidad
- Principio de subsidiariedad
- Principio de sustentabilidad
- Principio de solidaridad
- Principio de cooperación

Para operativizar la aplicación de la ley, el legislador establece como instrumentos de política y gestión ambiental los siguientes:

- El ordenamiento ambiental del territorio
- La evaluación de impacto ambiental
- El sistema de control sobre actividades antrópicas
- La educación ambiental
- Sistema de información ambiental
- Participación ciudadana
- Cauciones ambientales

Cabe señalar, que a los efectos de la aplicación efectiva de los instrumentos de política y gestión ambiental, ya indicados, es necesario que en algunos casos, como por ejemplo cauciones o seguros ambientales, participación ciudadana y fondos de compensación ambiental, se provean las reglamentaciones necesarias a fin de precisar la forma, oportunidad y medios que harán posible la ejecución de estas normas.

La ley también regula el daño ambiental de incidencia colectiva, a cuyo fin lo define como “toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos”. Consagra la responsabilidad objetiva en materia de daños ambientales, trasladando los principios de responsabilidad civil objetiva establecidos en el Artículo 1.113° del Código Civil y agravando los requisitos necesarios para la exención de responsabilidad.

Cabe destacar que en materia ambiental y conforme al tercer párrafo del Artículo 41° de la Constitución Nacional se ha producido por parte de las provincias una delegación a favor de la Nación en lo que hace a la determinación de “presupuestos mínimos” para la protección ambiental, los que deberán ser complementados con legislación provincial. En este sentido se han desdibujado las líneas divisorias entre las potestades nacionales y provinciales, por ello a los efectos de lograr el consenso necesario en materia ambiental se instituye el Sistema Federal Ambiental, el cual es

instrumentado por el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) con el objeto de desarrollar la coordinación de la política ambiental, tendiente al logro del desarrollo sustentable en todo el territorio de la República.

En la Provincia de San Juan se sancionó con anterioridad a la Ley Nacional N° 25.675, la Ley Provincial N° 6.634 denominada también Protección del Medio Ambiente o Ley General del Ambiente, tratada en este capítulo.

8.1.2.2 Ley Provincial N° 6.634, General del Ambiente - Principios Rectores para la Preservación, Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente Provincial

Publicación en el Boletín Oficial: 28 de Noviembre de 1995.

La citada ley establece, los principios rectores del derecho ambiental provincial y para ello declara de “Interés Provincial” las acciones y actividades destinadas a la preservación, conservación, defensa y mejoramiento de los diferentes ecosistemas urbanos, agropecuarios y naturales y sus elementos constitutivos, los que por su función y características, mantienen o contribuyen a mantener la organización ecológica más conveniente para el desarrollo cultural, científico y tecnológico y el bienestar común en armónica relación con el ambiente. Es decir, el Interés Provincial busca conciliar la conservación y preservación ambiental con el desarrollo cultural, científico y tecnológico y el bienestar común.

Para los efectos anteriores, la Ley Provincial N° 6.634 dispone que la preservación, defensa y mejoramiento del ambiente comprende, en lo que interesa al desarrollo de actividades productivas, lo siguiente:

La planificación y ordenamiento territorial urbano y rural. Evidentemente la definición del ordenamiento territorial son acciones que debe emprender la autoridad competente y a las cuales debe ajustarse todo proyecto de desarrollo industrial.

La utilización ordenada y racional del conjunto de los recursos naturales.

Las actividades tendientes al logro de una mejor calidad de vida de los ciudadanos en sus diferentes aspectos. Esto es, que el desarrollo de la actividad industrial sea compatible con el desarrollo y mejoramiento de la vida social y comunitaria.

La corrección, prohibición, anulación o represión de las actividades que degraden el ambiente humano, natural y cultural o que afecten el equilibrio ecológico, más allá de los límites establecidos en la normativa correspondiente. Lo anterior apunta al concepto de uso racional, ya mencionado, y al desarrollo sustentable, conceptos que reconociendo la necesidad de desarrollo económico y bienestar material de la

población busca la conciliación de éste con el medio ambiente. La medida de lo racional y de la compatibilidad de la actividad económica o industrial está dada por los límites definidos por la legislación vigente aplicable a la actividad minera, para las descargas al medio a través de las emisiones atmosféricas, hídricas y de residuos industriales sólidos, así como del cumplimiento de las obligaciones ambientales legales.

Para implementar los principios anteriormente enunciados, la Ley General del Ambiente, dispone que el poder ejecutivo provincial y los municipios garanticen, en la ejecución de sus actos de gobierno, la política económica y social que observe los siguientes postulados de Política Ambiental, entre los que interesa destacar:

Promover y orientar el desarrollo económico con criterios ambientales.

Promover y orientar el desarrollo económico con criterios sustentables, no limitándose a establecer restricciones y controles.

Los actos de gobierno estarán inspirados siempre en la adopción de medidas preventivas, antes que en la implementación de medidas de saneamiento o reparación, optándose por éstas últimas cuando no son viables las primeras.

Propiciará el mejoramiento gradual de la calidad ambiental, mediante la disminución de los niveles de contaminación. Para este efecto se establecerán estándares ambientales y límites máximos permisibles de emisiones contaminantes sean éstas sólidas, líquidas o gaseosas.

Los conceptos vertidos anteriormente establecen el objetivo de la legislación ambiental y la finalidad perseguida con ésta, como herramienta e instrumento de gestión ambiental por parte de la autoridad de aplicación general.

La ley también crea el Fondo Provincial del Ambiente con el objetivo principal de captar recursos dirigidos al financiamiento de las actividades determinadas para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley.

En virtud de dicha ley, los organismos de aplicación corresponden al Poder Ejecutivo Provincial y los Municipios.

De lo expuesto y relacionando la norma provincial analizada con la Ley General del Ambiente Nacional, se puede concluir que no existen en esa norma provincial disposiciones contrarias a la ley nacional, por lo cual la citada norma cumple con el principio de congruencia vigente en esta materia.

8.1.2.3 Ley Provincial N° 6.006, para la Defensa Judicial de los Intereses Difusos y Derechos Colectivos.

De acuerdo a su Artículo 1º, los objetivos de esta ley es la defensa jurisdiccional, entre otros, de los intereses difusos y derechos colectivos, brindando protección esos fines al medio ambiente, a la conservación del equilibrio ecológico, los valores estéticos, históricos, urbanísticos, artísticos, arquitectónicos, arqueológicos y paisajísticos.

Para estos efectos, establece dos acciones: en primer término, una acción de protección, cuyos objetivos son obtener la prevención de un daño grave e inminente o la cesación de perjuicios susceptibles de prolongarse; y, en segundo término, una acción de reparación de los daños colectivos, a fin de obtener la reposición de las cosas al estado anterior al menoscabo, entendida respecto al medio ambiente como la recomposición del equilibrio de los valores ecológicos.

8.1.2.4 Ley Provincial N° 6.571, Evaluación del Impacto Ambiental, modificada por Ley Provincial N° 6.800

Ley Provincial N° 6.571: Boletín Oficial 3 de Enero 1995.

Ley Provincial N° 6.800: Boletín Oficial 16 de Julio 1997.

La Ley N° 6.571 se aplica a todos los proyectos de obras o actividades capaces de modificar directa o indirectamente el ambiente del territorio provincial, quienes deberán obtener su correspondiente Declaración de Impacto Ambiental (DIA), expedida por la Subsecretaría de Política Ambiental (hoy Subsecretaría de Medio Ambiente), que resulta ser la Autoridad de Aplicación de esta norma.

Esta ley fue modificada por la Ley Provincial N° 6.800, la cual introduce importantes modificaciones, todas referidas a la actividad minera.

En virtud de esta norma, las actividades mineras comprendidas en el Código de Minería, título complementario de la protección ambiental para la actividad minera, quedan excluidas del ámbito de aplicación de la Ley N° 6.571.

En cuanto al procedimiento de evaluación ambiental de los proyectos mineros se indica que los mismos deberán cumplir las disposiciones contenidas en el Código de Minería, título complementario de la protección ambiental para la actividad minera, y sus normas reglamentarias.

En forma específica y para los proyectos mineros se dispone que será Autoridad de Aplicación y encargada de expedir la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental, (DIA), el Departamento de Minería (hoy Secretaría de Minería).

8.1.2.5 Ley Provincial N° 7.620/05

Esta norma, en su Artículo 13°, ratifica como autoridad de aplicación de las actividades mineras, al Departamento de Minería (hoy Secretaría de Minería, según Ley N° 7.687/06) con intervención de la Subsecretaría de Política Ambiental (hoy Subsecretaría de medio Ambiente, según Ley N° 7.687/06).

8.1.2.6 Ley Provincial N° 7.687/06

Conforme esta ley, la Secretaría de Minería (que tiene a cargo la Subsecretaría Técnica –antes Dirección de Minería- y la Subsecretaría de Gestión ambiental y Policía Minera –antes UGAM), es la autoridad de aplicación de las Leyes N° 24.585; 6.800 y 7.620, siendo responsable del dictado de la DIA para las actividades mineras.

8.1.2.7 Ley Nacional N° 25.831, Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental

Publicación en el Boletín Oficial: 7 de Enero del 2004.

Esta norma, es una ley de presupuestos mínimos, por lo cual establece las bases mínimas de protección que son de aplicación en todo el territorio de la Nación, incluyendo las Provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

Es importante considerar que su texto amplía lo estipulado por la Ley General del Ambiente (Artículo 2° inc. i y el Capítulo denominado Información Ambiental), y garantiza el derecho de acceso a la información ambiental que se encontrare en poder del Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, como así también de entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas (Artículo 1°).

La ley pretende facilitar el ejercicio del derecho al establecer el acceso a dicha información ambiental en forma libre y gratuita para toda persona física o jurídica sin necesidad de acreditar razones ni interés determinado.

A objeto de la presente ley, la información ambiental, se ha definido expresamente como “toda aquella información en cualquier forma de expresión o aporte relacionada con el ambiente, los recursos naturales o culturales y el desarrollo sustentable”. Sin embargo enumera taxativamente los casos en los cuales la información ambiental solicitada puede ser denegada mediante decisión o acto fundado.

Cabe consignar que la propia ley establece el plazo de noventa días para que se reglamente este régimen legal, como así también para que las autoridades nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires concreten dentro del ámbito del

COFEMA los criterios para establecer los procedimientos de acceso a la información ambiental en cada jurisdicción, situación que no se ha producido hasta el momento. Es por ello que se considera que la misma no es operativa hasta que no se cumplimente con estos requerimientos.

8.1.2.8 Ley Provincial N° 2.553, Denominada Código Sanitario

Publicación en el Boletín Oficial: 2 Julio 1959.

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 2° del texto legal, es obligación de la Provincia velar por la salubridad en todo su territorio, en concordancia con las obligaciones que competen a la Nación y a los Municipios, a objeto de asegurar a sus habitantes un nivel adecuado para el mantenimiento de la salud.

Esta obligación se cumple mediante acciones de protección, promoción y reparación de salud. Estas comprenden preferentemente las relativas al saneamiento del medio ambiente, a la promoción y control del agua de bebida y a la eliminación de excretas; al control de los insectos roedores, basuras y animales; al control de alimentos, al saneamiento de viviendas, industrias y locales, entre otras.

La autoridad de aplicación es la Secretaría de Salud Pública, conforme a lo que se desprende del Artículo 6° de esta ley y, particularmente, a lo establecido en el Artículo 185° de la misma. Adicionalmente, la policía prestará colaboración a Salud Pública en las labores que ésta realice.

8.1.2.9 Ley Nacional N° 18.284, Código Alimentario Argentino, y su Decreto Reglamentario N° 2.126/1971

Ley Nacional N° 18.284: Boletín Oficial 28 Julio de 1969.

Decreto Reglamentario N° 2.126: Boletín Oficial 20 de Septiembre de 1971.

Conforme su denominación, esta ley establece las condiciones y requisitos que deberán reunir las fábricas de alimentos y los lugares de expendio de éstos. Esta reglamentación es extensiva también a los casinos donde se preparen alimentos para su consumo en el mismo lugar.

La autoridad de aplicación será la autoridad sanitaria competente en el lugar donde se produzcan los alimentos.

8.1.3 Legislación de Carácter General Aplicable a la Minería

8.1.3.1 Ley 24.196, Ley de Inversiones Mineras, Decreto Reglamentario N° 2.686/1994 y Modificatorias

Ley Nacional N° 24.196/1993: Boletín Oficial 24 de Mayo de 1993.

Decreto Nacional N° 2.686/1994: Boletín Oficial 3 Enero 1994.

Estos textos legales tienen por finalidad principal fomentar los emprendimientos mineros mediante el otorgamiento de beneficios tales como: la estabilidad fiscal por el término de 30 años contados a partir de la presentación a las autoridades del estudio de factibilidad y la exención de aranceles aduaneros, de derecho y de todo impuesto especial, gravamen o tasa estadística, por la importación de bienes de capital, equipos especiales, partes o elementos componentes de dichos bienes, insumos determinados por la Secretaría de Minería, necesarios para la actividad minera, repuestos y accesorios.

Desde el punto de vista ambiental, ello es relevante por cuanto las empresas que opten por este beneficio deben constituir una previsión especial para prevenir y subsanar las alteraciones que en el medio ambiente pueda ocasionar la actividad e informar anualmente a la autoridad de aplicación, con carácter de declaración jurada, el importe de la previsión especial efectuada y el efectivamente erogado, no constituyendo esta previsión a los efectos de la ley la existencia de un seguro ambiental, pero sí una especial previsión para subsanar las alteraciones en el medio ambiente. Cabe destacar que los montos no utilizados por la previsión, deberán ser restituidos al balance impositivo del impuesto a las ganancias al finalizar el ciclo productivo.

Para los proyectos que caen en el ámbito de esta ley se deberá entregar a la autoridad un estudio técnico relacionado con el impacto ambiental ocasionado por la actividad y deberá mantener un cuidado especial en prevenir y remediar cualquier alteración al medio ambiente ocasionada a raíz de una actividad minera.

En virtud de la Ley Nacional N° 24.196, se determina como autoridad de aplicación a la Secretaría de Minería de la Nación. El Poder Ejecutivo Nacional concertará con las autoridades provinciales el ejercicio de las facultades constitucionales concurrentes.

8.1.3.2 Ley Nacional N° 24.228, Acuerdo Federal Minero y Ley Provincial de Adhesión N° 6.174

Ley Nacional N° 24.228: Boletín Oficial 02 de Agosto de 1993.

Ley por la que se Ratifica el Acuerdo Federal Minero, suscripto el 6 de Mayo del 1993 entre el Poder Ejecutivo Nacional y los Gobernadores de las Provincias.

Este acuerdo, firmado por las provincias mineras de Argentina, tiene por finalidad los siguientes objetivos ambientales:

Propiciar el aprovechamiento racional e integral de los recursos mineros en el territorio Nacional.

Promover el desarrollo sectorial consensuando medidas necesarias para atraer inversiones nacionales y extranjeras.

Afianzar el Federalismo en cuanto al papel que desarrollan los Gobiernos Provinciales como administradores del patrimonio minero de sus respectivos Estados.

Realizar en forma conjunta acciones destinadas a promover las oportunidades de inversión en la Minería Argentina.

Profundizar el proceso de descentralización como modelo para la prestación de las funciones básicas del Estado.

Proteger el medio ambiente a través de una racional actividad productiva.

Aplicar con criterios actualizados la legislación vigente y armonizar normas de procedimientos, teniendo en cuenta las características propias de cada región.

Optimizar el aprovechamiento de los recursos humanos, económicos y de infraestructura de las instituciones mineras nacionales y provinciales.

En definitiva, este acuerdo entre las provincias tiene por finalidad fomentar las inversiones en la actividad, tanto las de carácter nacional como internacional, fomentar el federalismo y la unificación de criterios en la materia y acentuar los procesos de descentralización.

En lo particular, respecto a la protección del medio ambiente, el Artículo 14° establece que las Provincias promoverán:

La necesidad de cumplimentar, tanto para la actividad pública como privada, una declaración de impacto ambiental para las tareas de prospección, exploración, explotación, industrialización, almacenamiento, transporte y comercialización de minerales.

Implementar nuevas formas de fomento, como las especificadas en el Artículo 22° de la Ley Inversiones Mineras –refiérase a las regalías-, a los emprendimientos que favorezcan al medio ambiente, tales como la forestación de áreas mineras.

Destinar fondos para la investigación que lleve a un mayor desarrollo tecnológico y social en proyectos vinculados a la conservación del medio ambiente en la actividad minera.

Finalmente, consagra una disposición de carácter orgánico en cuanto establece que el Consejo Federal Minero será un órgano consultivo en materia de desarrollo regional, medio ambiente y aspectos tributarios provinciales relacionados con el presente Convenio.

El Acuerdo Federal Minero, en virtud de la Ley Provincial N° 6.174 de adhesión al Acuerdo del Consejo Federal Minero, aprobada el 05 de Septiembre de 1991, se constituyó en ley de la provincia.

8.1.3.3 Ley Provincial N° 7.281/02. Ley de Regalías de la Provincia de San Juan.

Esta ley establece las bases para la determinación de las regalías mineras y el destino de los fondos recaudados en concepto de estos. A los efectos del cálculo del mineral de “boca mina” se rige por la Ley Provincial N° 7.029/00 mediante la cual la Provincia de San Juan se adhirió a la Ley Nacional N° 25.161 que incorpora el Artículo 22° de la Ley Nacional N° 24.196 de Inversiones Mineras.

8.1.3.4 Código de Minería, Ley Nacional N° 24.585. Decreto Provincial N° 1.426/1996 y Código de Procedimientos Mineros, Ley N° 7199, Provincia de San Juan

Ley Nacional N° 24.585: Boletín Oficial 24 de Noviembre de 1995.

Decreto Provincial N° 1.426/1996: Boletín Oficial 25 de Noviembre de 1996.

Esta ley, incorporada al Texto Ordenado del Código de Minería, Decreto Nacional N° 456/97, en el Título Decimotercero – Condiciones de la Explotación, Sección II, Artículos 246° a 268° inclusive, regula todo lo relativo a la protección ambiental para la actividad minera y específicamente todo lo vinculado a la protección del ambiente y la conservación del patrimonio natural y cultural, que pueda verse

afectado por la actividad aludida. Adicionalmente, El Código de Procedimientos Mineros de la Provincia de San Juan, Ley N° 7199, establece disposiciones complementarias al Código de Minería y hace aplicable expresamente las normas de protección ambiental establecidas en el Título XIII, Sección Segunda del Código de Minería.

Conforme al Artículo 251° del Código de Minería, el titular minero está obligado a evaluar el impacto ambiental que se generará por la actividad a emprender, sea que se trate de faenas de prospección, exploración o explotación. Para estos efectos, el titular minero está obligado a presentar ante la autoridad de aplicación – Secretaría de Minería – y antes del inicio de cualquier actividad especificada en el Artículo 249°, un Informe de Impacto Ambiental.

Los contenidos del IIA han sido desarrollados y profundizados en el Anexo III de las Normas Complementarias para la Implementación de la Ley N° 24.585 de Protección Ambiental para la Actividad Minera, Presupuestos Mínimos, aprobadas por el Decreto Provincial N° 1426-MPI y MA-1996.

En cuanto a las normas de Protección y Conservación Ambientales, para el desarrollo del IIA y de la evaluación ambiental se adoptarán los estándares de calidad de agua, aire y suelo contenidos en el Anexo IV del texto de las Normas Complementarias. Para efectos de verificar la calidad de los componentes ambientales regulados, el titular adoptará los procedimientos técnicos de muestreo y análisis indicados por la American Society For Testing Materials (ASTM) en español, Sociedad Americana para el Testeo de Materiales y la US Environmental Protection Agency (USEPA), en español, Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.

En lo particular, respecto a la línea base, el Informe de Impacto Ambiental contendrá los datos de unidades, caudales, concentraciones y tipos de constituyentes, en sus respectivos puntos de emisión, la distancia requerida para observar los puntos de verificación de cumplimiento y el método o modelo empleado para realizar la estimación.

Las actividades que quedan sujetas a esta obligación están descritas en el Artículo 249° del Código de Minería, el que señala lo siguiente:

“Las actividades comprendidas en la siguiente sección son:

Prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación, extracción y almacenamiento de sustancias minerales comprendidas en este Código de Minería, incluidas todas las actividades destinadas al cierre de la mina.

Los procesos de trituración, molienda, beneficio, pelletización, sinterización, brinqueteo, elaboración primaria, calcinación, fundición, refinación, aserrado, tallado, pulido, lustrado, otras que puedan surgir de nuevas tecnologías y la disposición de residuos cualquiera sea su naturaleza”.

Cabe señalar que cuando sea otorgada la Declaración de Impacto Ambiental que se deriva del Informe de Impacto Ambiental, nace para el titular minero la obligación genérica de cumplir con lo establecido en la misma y cada dos años presentar un Informe de Actualización de Impacto Ambiental. Este informe ameritará una nueva Declaración de Impacto Ambiental sólo en el evento que éste de cuenta de desajustes significativos entre los resultados esperados por la DIA y los efectivamente generados.

De la legislación reseñada, (Artículo 11° de la normativa básica que aprueba el Decreto Provincial N° 1.426/1996), surge también la obligación del titular minero de informar todo accidente que ocurrido en el área de influencia del proyecto, tenga incidencia sobre los equipos, instalaciones, sistemas, acciones y actividades enumeradas en el Artículo 13° del Título Complementario y sus consecuencias importen riesgo grave para la salud de la población o para el medio ambiente. Esta obligación deberá cumplirse en forma inmediata y mediante comunicación fehaciente que comprenda el accidente, las medidas de mitigación adoptadas y el plan de contingencias propuesto.

Esta ley establece el principio de responsabilidad objetiva, por el cual todo el que cause daño al medio ambiente debe responder de él, sin que sea necesario que en la generación de dicho daño haya actuado con dolo o con culpa.

En efecto, de acuerdo al Artículo 263° del Código de Minería y, sin perjuicio de las sanciones administrativas y penales que establezcan las normas vigentes, todo el que causare daño actual o residual al patrimonio ambiental estará obligado a mitigarlo, rehabilitarlo, restaurarlo o recomponerlo según correspondiere.

Todo titular de un proyecto minero que ha obtenido la DIA y que cumple con los requisitos exigidos por la ley, está facultado a solicitar un Certificado de Calidad Ambiental que así lo acredite.

Con fecha 09 de Octubre de 1996, la Provincia de San Juan aprobó las normas complementarias de la Ley Nacional N° 24.585 haciéndolas aplicables a la Provincia, mediante Decreto Provincial 1.426, publicado en el Boletín Oficial el 25 de Noviembre de 1996. El decreto no introduce modificaciones, ni establece nuevas regulaciones, sólo hace aplicables las normas descritas, transcribiendo las mismas.

Finalmente, en virtud del Decreto Provincial N° 589 de fecha 30 de Abril de 1996, y luego por Ley Provincial N° 6.800 sancionada el 19 de Junio de 1997, modificatoria de la Ley Provincial N° 6.571, sancionada el 25 de Noviembre de 1994, la Provincia de San Juan designó como autoridad de aplicación de la Ley de Protección Ambiental para la Actividad Minera en todo el ámbito de la Provincia de San Juan, al Departamento de Minería dependiente de la Subsecretaría de Minería (hoy Secretaría de Minería), con intervención de la Subsecretaría de Política Ambiental (hoy Secretaría de Medio Ambiente).

8.1.3.5 Decreto N° 1679/2006, Provincia de San Juan, Reglamento para la Protección Ambiental en la Etapa de Explotación de los Pequeños y Medianos Emprendimientos Mineros.

Este reglamento, a los fines de aplicación de la sección segunda del Título XIII del Código de Minería de la Nación, establece normas para la protección ambiental en la etapa de explotación de los pequeños y medianos emprendimientos mineros en la Provincia. En particular, establece un procedimiento administrativo de evaluación y normas de participación ciudadana.

Para estos efectos distingue entre:

Pequeño emprendimiento minero: el que cuenta con una reserva menor a un millón de onzas de oro equivalente y/o una escala de producción diaria de mineral menor a ocho mil toneladas.

Mediano emprendimiento minero: el que cuenta con una reserva entre un millón y cinco millones de onzas de oro equivalente y/o una escala de producción diaria de mineral entre ocho mil a veinticinco mil toneladas de mineral.

8.1.4 Legislación Relacionada con la Conservación y Manejo de los recursos Hídricos

8.1.4.1 Ley Nacional N° 25.688, Régimen de Gestión Ambiental de Aguas

Publicación en el Boletín Oficial: 3 de Enero del 2003.

Esta ley tiene por objeto establecer los presupuestos ambientales mínimos para la preservación, aprovechamiento y uso racional de las aguas.

Para la gestión territorial de las aguas establece el concepto de cuencas hídricas, la que se define como la región geográfica delimitada por las divisorias de aguas que discurren hacia el mar a través de una red de cauces secundarios que convergen en un cauce principal único y las endorreicas. Esta unidad ambiental de gestión es indivisible.

Aún cuando no se establece expresamente, se entiende que la autoridad de aplicación de la norma será aquella competente en materia de aguas en cada provincia. En lo que interesa al proyecto Casposo, la utilización de las aguas a los efectos de la ley comprende la toma de aguas subterráneas, su elevación, sobre tierra, y su desviación.

Con el objeto de gestionar el uso del recurso, las acciones identificadas más arriba obligan al titular de la faena a obtener la correspondiente autorización de la Autoridad de Aplicación.

En atención a que la norma analizada no ha sido reglamentada, tal como lo dispone su Artículo 9º, sus disposiciones no tienen el carácter de operativas. No obstante ello, se asume que las competencias aquí establecidas serán responsabilidad del Departamento de Hidráulica, en su carácter de Autoridad de Aplicación Provincial en materia de aguas, y los estándares a cumplir, en la medida que el gobierno nacional no dicte las reglamentaciones ordenadas por el legislador, son las vigentes en la provincia, no obstante la Provincia de San Juan deberá adecuar su legislación a la nueva normativa.

8.1.4.2 Ley Provincial N° 4.392, Denominada Código de Aguas, Modificada por Ley N° 4526/79.

Publicación en el Boletín Oficial: 12 Junio de 1978.

Este Código tiene como objetivo la regulación del sistema de aprovechamiento, conservación y preservación de los recursos hídricos pertenecientes al dominio público.

Conforme a lo anterior y a lo dispuesto en del Código Civil, son bienes del Estado Provincial los ríos y sus lechos, todas las aguas que corren por sus cauces naturales con excepción de las vertientes que nacen y mueren dentro de una misma heredad particular, en cuyo caso pertenecen en propiedad, uso y goce al dueño de la misma.

En síntesis, son bienes del Estado Provincial todas las aguas que se deriven de los arroyos y ríos, ya sean afluentes de éstos o que se extraigan por medio de canales, acueductos y de cualquier otra obra pública, como asimismo las aguas de desagües después de haber salido de la propiedad privada y las que provengan de la desecación de ciénagas y drenajes en general.

En cuanto a la conservación y preservación del recurso hídrico, el Código de Aguas dispone que nadie podrá contaminar aguas públicas o privadas, sean corrientes o no, superficiales o subterráneas. Si la contaminación generada, independientemente del medio utilizado, pudiera afectar la vida o salud de las personas o animales o generara efectos nocivos en la vegetación o calidad del suelo, ello significará una infracción

grave que será sancionada en la forma prevista por el Código de Aguas, sin perjuicio de la inmediata cesación de la actividad prohibida.

En lo particular, señala que está prohibido todo hecho u obra susceptible de contaminar o hacer inaptas las aguas subterráneas para el consumo humano, bebida de animales o para irrigación.

En este sentido, es condición sine qua non de funcionamiento de un pozo de explotación de agua que esta actividad, así como la perforación, no cause perjuicio a terceros y no ocasione cambios físicos o químicos que dañen las condiciones del acuífero o del suelo.

En cuanto al aprovechamiento del recurso hídrico, el Código de Aguas regula los modos de adquirir o constituir derechos sobre el uso del agua, los modos de extinción y caducidad de los mismos, así como el procedimiento destinado a su constitución. Dentro de los usos contempla el uso común del agua, los permisos y la concesión.

El uso común, que no requiere autorización o pronunciamiento de la autoridad, consiste en: bebida, higiene humana, lavado de ropa y otros empleos reducidos, como bebida de animales domésticos y riego de huertos y jardines, siempre que la extracción de agua se efectúe sin uso de máquinas ni aparatos y sin deteriorar los márgenes, ni retener, demorar o acelerar el curso de las aguas, ni producir anegamientos o peligros de contaminación.

Este uso tiene prioridad sobre cualquier uso especial, debiendo todo concesionario, permisionario o autorizado respetar ese orden de prelación.

Para pequeñas utilizaciones de agua, con un carácter transitorio, está prevista la figura del Permiso de uso, que es de carácter temporal.

Para los demás usos, entre los que nos interesa el uso minero y uso industrial, el Código de Aguas adoptó la figura jurídica de la concesión. Esta otorga el derecho subjetivo permanente al uso especial de aguas, obras, materiales en suspensión, o álveos y cauces públicos, que sólo deriva de las concesiones otorgadas conforme al régimen legal vigente al momento de su otorgamiento y de las que se otorguen en lo futuro.

La autoridad de aplicación del Código de Aguas es el Departamento de Hidráulica.

8.1.4.3 Ley Provincial N° 5.824, sobre la Preservación de los Recursos de Agua, Suelo y Aire y Control de la Contaminación en la Provincia de San Juan, Decreto Provincial N° 638/1989 y el Decreto Modificatorio de la Reglamentación de la Ley, Decreto N° 2107-MiyT-06; Acta No. 2489, Punto 9.

Ley Provincial N° 5.824: Boletín Oficial 27 de Noviembre de 1987.

Decreto Provincial N° 638/1989: Boletín Oficial 7 de Septiembre de 1989.

Decreto Provincial N° 2107/2006: Boletín Oficial 29 de Diciembre de 2006.

Acta No. 2489 Pto. 9, del Consejo del Departamento de Hidráulica, de fecha 25 de Octubre de 2005: “Normas de procedimiento para el control de descargas de efluentes industriales a cuerpos receptores de injerencia del Departamento de Hidráulica”.

La Ley N° 5.824/1987 denominada “Ley para la preservación de los Recursos de agua, suelo y aire y control de la contaminación en la Provincia de San Juan” está destinada fundamentalmente a la preservación del recurso “agua” y de manera muy general y soslayada al recurso suelo y aire.

Por medio de la ley analizada es obligatorio en todo el territorio provincial la adopción de las medidas necesarias para prevenir toda alteración de las aguas, superficiales y subterráneas que las tornen nocivas para los usos a que está destinada. Quedan comprendidas por los alcances de esta ley las actividades industriales, comerciales, agropecuarias y de servicios que generen efluentes.

La Ley Provincial prohíbe la descarga de efluentes domésticos no tratados a cursos o cuerpos de agua superficial o subterráneo, la norma reglamentaria completa la norma indicando que: *“En ningún caso el destino de los efluentes domésticos, aún tratados será la red de riego. Tampoco a pozos absorbentes excavados o perforados, liberados a suelos (canchas de infiltración), que pudieran afectar a los acuíferos libres, semiconfinados o confinados y/o a cauces, salvo en los casos particulares debidamente analizados por la Autoridad del Departamento de Hidráulica y cuando no revistieran riesgo alguno. Fuera de esta situación, se ajustará a las condiciones de vuelco a red cloacal, cuando ésta existiere”*.

La norma obliga al titular de un proyecto o actividad a:

Adoptar las medidas necesarias para prevenir la alteración de las aguas.

Obtener la autorización de la autoridad competente, previa a cualquier descarga.

Obtener el empadronamiento del respectivo establecimiento industrial.

Obtener el empadronamiento de su Planta de Tratamiento en los casos que corresponda.

La Ley Provincial N° 5.824, determina que será organismo de aplicación el Departamento de Hidráulica en lo relativo a descarga de efluentes de cualquier naturaleza, cuyos cuerpos receptores sean acuíferos, ríos, arroyos y todas las aguas que corren por cauces naturales. La autorización de la descarga industrial dispondrá el cumplimiento de los estándares que el reglamento establece, sea que se trate de residuos industriales o aguas servidas.

El Honorable Consejo de Hidráulica, en su carácter de autoridad de aplicación de la mencionada ley y por Acta N° 2.423/2004 aprueba la reglamentación para obtener la autorización de descarga correspondiente.

8.1.5 Legislación Relacionada a la Protección de los Recursos Patrimoniales

8.1.5.1 Ley Nacional N° 25.743 Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico y Decreto Reglamentario N° 1.022/2004

Ley Nacional N° 25.743: Boletín Oficial: 26 de Junio del 2003.

Decreto Reglamentario N° 1.022/2004: Boletín Oficial 12 de Agosto del 2004.

Esta ley resulta aplicable en todo el territorio de la Nación, siendo su objeto la preservación, protección y tutela del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación y el aprovechamiento científico y cultural del mismo.

Reconoce que los bienes arqueológicos y paleontológicos son del dominio público del Estado nacional, provincial o municipal, según el ámbito territorial en que se encuentren, conforme a lo establecido en los Artículos 2.339° y 2.340° inciso 9° del Código Civil y por el Artículo 121° y concordantes de la Constitución Nacional. Además crea un Registro Nacional de Yacimientos Arqueológicos y Paleontológicos y un Registro Oficial de Colecciones u Objetos Arqueológicos o Restos Paleontológicos.

8.1.5.2 Ley Provincial N° 6.801, Ley Marco sobre el Patrimonio Histórico Cultural y Decreto Provincial Reglamentario N° 1.134/2001

Ley Provincial N° 6.801: Boletín Oficial: 6 de Octubre 1997.

Decreto Provincial N° 1.134/2001: Boletín Oficial: 05 de Octubre del 2001.

El texto legal provincial, tiene por finalidad conservar como testimonio para el conocimiento y desarrollo cultural de las generaciones futuras el Patrimonio Cultural y Natural de la Provincia de San Juan. Este está conformado por “todos aquellos bienes que, material y/o culturalmente, reportan un interés cultural, antropológico, prehistórico, arqueológico, etnológico, histórico, artístico, artesanal, monumental, documental y tecnológico que significan o pueden significar un aporte relevante para

el desarrollo cultural de la Provincia de San Juan, que se encuentren en el territorio de la Provincia, cualquiera fuere su propietario, luego de su declaración como tales por ley de la Provincia”.

Para el fomento de la conservación del Patrimonio Cultural y Natural de la Provincia de San Juan, la ley reconoce cuatro grandes categorías de protección para estos bienes, a saber:

Monumento Histórico Provincial
Lugar Histórico Provincial
Bienes Muebles de Interés Cultural y Natural
Patrimonio Cultural Inmaterial

Para el fomento de su conservación, la ley provincial y su reglamento establecen la obligación de quien los hallare o de su dueño o poseedor de la denuncia del bien. Como contrapartida establece beneficios tributarios.

La declaración de un bien como integrante del Patrimonio Cultural y Natural de la Provincia implica la prohibición de la destrucción total o parcial, demolición, ampliación o reconstrucción, en todo o en parte del mismo sin previa autorización de la Autoridad de Aplicación. Conforme la reglamentación provincial la Autoridad de Aplicación deberá expedirse sobre la autorización para alterar las condiciones del bien en un plazo perentorio de 15 días, vencido el cual, y sin que exista resolución o siendo esta negativa, el particular queda facultado a realizar solamente los trabajos que sean necesarios para la conservación del bien y aquellos trabajos que sean necesarios para evitar algún daño a terceros de conformidad a las disposiciones de los Artículos 2.616° y 2499° apartado 2° del Código Civil.

Finalmente, establece una serie de restricciones y/o prohibiciones destinadas a preservar y conservar la integridad e inalterabilidad del bien. Asimismo, todo contrato o negocio que quiera ejecutarse sobre el bien, en relación con la tenencia, posesión o propiedad del bien, requiere de la vista de la autoridad de aplicación.

El hallazgo fortuito de bienes que presuntamente puedan ser significativos para el Patrimonio Cultural y Natural de la Provincia, deberán ser denunciados inmediatamente a la autoridad de aplicación o ante la Seccional policial más cercana.

La autoridad de aplicación es, de acuerdo al Artículo 8°, el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de San Juan, a través de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de San Juan hoy dependiente de la Secretaría de Turismo, Cultura y Medio Ambiente.

8.1.6 Legislación Relacionada a la Protección de la Flora y Fauna

8.1.6.1 Ley Nacional N° 22.421, de Protección y Conservación de la Fauna Silvestre y su Decreto Reglamentario N° 666/1997. Ley Provincial N° 6.911, sobre la Flora y Fauna Silvestre

Ley Nacional N° 22.421: Boletín Oficial 12 Marzo 1981.

Decreto Nacional N° 666/1997: Boletín Oficial 25 de Julio de 1997.

Ley Provincial N° 6.911: Boletín Oficial 10 de Marzo de 1999.

Ley Provincial N° 6.912: instituye el régimen sancionatorio a las transgresiones de los contenidos de la Ley N° 6.911. Sanción: 10 de Diciembre de 1998.

Esta norma declara de interés público la fauna silvestre que temporal o permanentemente habita el territorio de la República, así como su protección, conservación, propagación, repoblación y aprovechamiento racional.

Como consecuencia de lo anterior, todos los habitantes de la Nación tienen el deber de proteger la fauna silvestre. En función de ello, queda regulado por la presente ley la caza, hostigamiento, captura o destrucción de sus crías, huevos, nidos y guaridas, tenencia, posesión, tránsito, aprovechamiento, comercio y transformación de la fauna silvestre y sus productos o subproductos.

En lo particular establece que los estudios de factibilidad y proyectos de obras tales como desmontes, secado y drenaje de tierras inundables, modificaciones de cauce de río, construcción de diques y embalses, que puedan causar transformaciones en el ambiente de la fauna silvestre, deberán ser consultados previamente a las autoridades nacionales o provinciales competentes en materia de fauna.

El Poder Ejecutivo Nacional y las provincias tienen a su cargo la aplicación de las disposiciones de la presente ley en sus respectivas jurisdicciones.

En el ámbito provincial se encuentra vigente la Ley Provincial N° 6.911 denominada Ley sobre la Flora y Fauna Silvestre, la cual tiene como bienes protegidos las áreas naturales, la flora, la fauna silvestre y la fauna ictícola. Esta ley es también tratada en este capítulo.

8.1.6.2 Ley Nacional N° 22.344, Aprueba Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, y Decreto Nacional N° 522/97 Decreto Reglamentario-Comercio Exterior-Protección de la Flora y Fauna Silvestre

La Ley Nacional N° 22.344 aprobó la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres, suscripta en Washington el 3 de

marzo de 1973, sus Apéndices, así como las enmiendas a los Apéndices I, II y III, adoptadas en las reuniones de la Conferencia de las Partes realizadas en Berna en noviembre de 1976 y San José de Costa Rica en marzo de 1979.

Por su parte, el Decreto Nacional 522/97 establece las medidas conducentes para asegurar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Convención, estableciendo como Autoridad de Aplicación la Secretaría de Estado de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la Presidencia de la Nación.

8.1.6.3 Ley Nacional N° 22.351, sobre Parques y Reservas Nacionales y Monumentos Naturales

Publicación Boletín Oficial: 12 Diciembre 1980.

El texto de la presente ley establece el régimen legal y sistema de declaración de Parques, Reservas Nacionales y Monumentos Naturales que por sus extraordinarias bellezas o riquezas en flora y fauna autóctona o en razón de un interés científico determinado, deban ser protegidas y conservadas para investigaciones científicas, educación y goce de las presentes y futuras generaciones, con ajuste a los requisitos de Seguridad Nacional.

Define las categorías de áreas protegidas, su administración, la autoridad de aplicación y las facultades de éstas.

Esta ley establece 3 categorías de áreas protegidas, los Parques Nacionales, los Monumentos Nacionales y las Reservas Nacionales. La autoridad de aplicación de la ley es la Administración de Parques Nacionales.

8.1.6.4 Ley Provincial N° 6.911, sobre la Flora y Fauna Silvestre

Publicación Boletín Oficial: 10 Marzo 1999.

El objetivo de la presente Ley es “Proteger, conservar, propagar, repoblar, generar y promover el aprovechamiento sustentable de la flora, fauna silvestre, fauna ictícola así también la creación, fiscalización y desarrollo de las Áreas Naturales Protegidas a fines de preservar la biodiversidad y los ecosistemas en todo el territorio de la Provincia de San Juan”. En consecuencia con lo anterior, a continuación se describe el contenido legal para estos dos aspectos.

Como consecuencia del interés manifestado, la Ley declara que los ambientes naturales y sus recursos constituyen un patrimonio natural de fundamental valor cultural e importancia socio – económica, por lo que se declara de interés público su conservación y/o preservación. Así también, se declara de interés público a la fauna silvestre que temporal o permanentemente habita el territorio de la provincia. Lo

mismo ocurre con la preservación, propagación, restauración, población, repoblación y aprovechamiento racional de la flora silvestre.

Considerando los fines de protección que enmarcan las acciones aludidas en el párrafo anterior, la ley dispone de dos mecanismos de protección. Por una parte establece la protección de las especies de fauna silvestre como individuos, definiendo seis categorías de manejo a modo de distinguir y priorizar su importancia y conservación. Entre las categorías se reconocen:

- Especies en peligro de extinción.
- Especies amenazadas.
- Especies vulnerables.
- Especies no amenazadas.
- Especies insuficientemente conocidas.
- Especies Protegidas.

Además, la ley dispone la prohibición de la caza de animales de la fauna silvestre, el hostigamiento, la destrucción de su hábitat, refugios, nidos, y huevos.

Como segundo instrumento, la ley dispone áreas cuyo objetivo es la protección del hábitat en su integridad. Para ello, el texto legal establece distintas categorías de manejo de las áreas naturales.

8.1.6.5 Ley Provincial N° 6.912

Esta norma instituye el regimen sancionatorio a las transgresiones de los contenidos de la Ley N° 6.911, de Protección y Desarrollo de la Fauna y la Flora Silvestre, Creación y Promoción de Áreas naturales.

8.1.7 Legislación Ambiental Relacionada a la Infraestructura Requerida

8.1.7.1 Ley Nacional N° 13.660, Dicta Normas a que Deberán Ajustarse las Instalaciones de Elaboración, Transformación y Almacenamiento de Combustibles, Decreto Reglamentario N° 10.887 y Decreto Nacional N° 1.212/1989

Ley Nacional N° 13.660: Boletín Oficial 4 Noviembre 1949.

Decreto Nacional N° 1.212/1989: Boletín Oficial 14 de Noviembre de 1989.

El Decreto Nacional N° 1.212, sancionado el ocho de Noviembre de 1989 fijó como objetivo la desregulación del sector de hidrocarburos, manteniendo vigente las normas aplicables en cuanto al almacenamiento de los mismos.

La Ley Nacional N° 13.660 y su Decreto Reglamentario, disponen que la construcción, ampliación o modificación de depósitos de combustibles (líquidos, gaseosos o sólidos minerales) estará sujeto a la autorización del Poder Ejecutivo y deberán ajustarse, en todo, a las normas que para este efecto se dicten.

La autoridad de aplicación de la presente norma y de las resoluciones referidas en los puntos siguientes es la Secretaría de Energía de la Nación, dependiente del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

Tanto la ley analizada como las resoluciones que a continuación se exponen son de aplicación en todo el territorio nacional y no requieren por parte de la Provincia adhesión a las mismas.

8.1.7.2 Resolución N° 1102/04 de la Secretaría de Energía

Publicación en el Boletín Oficial: 05 de enero de 2005.

La Resolución N° 1102/2004, sancionada en fecha 03/11/04 por la Secretaría de Energía de la Nación, creó el “Registro de Bocas de Expendio de Combustibles Líquidos, Consumo Propio, Almacenadores, Distribuidores y Comercializadores de Combustibles e Hidrocarburos a Granel y de Gas Natural Comprimido”, siendo obligatoria la inscripción en dicho registro para la correcta habilitación y funcionamiento de la planta de almacenamiento de combustibles. Su falta esta sancionada con multa establecida al efecto.

En dicho Registro quedan incorporadas, las personas físicas o jurídicas que a la fecha de entrada en vigencia de la resolución se encuentran inscriptas en el Registro de Bocas de Expendio de Combustibles Líquidos y Bocas de Expendio de Fraccionadores y Revendedores de Combustibles a Grandes Consumidores, creado por la Resolución N° 79-SE-99, derogada por la Resolución N° 1102/04.

Además y específicamente el Artículo 11° de la Resolución N° 1102/04 se expresa: “Quedan comprendidos en la presente resolución: ...d) los titulares de almacenamientos de combustibles para consumo privado, pertenecientes a entidades públicas o privadas, localizados en puertos, aeropuertos dársenas, industrias, playas de maniobra, estacionamientos, garajes o en cualquier otro sitio”.

La inscripción se realizará acompañando información técnica que documente el almacenamiento, la que tendrá el carácter de Declaración Jurada.

8.1.7.3 Resolución N° 404/1994 de la Secretaría de Energía

Publicación en el Boletín Oficial: 29 Diciembre 1994.

Esta resolución dispone la obligación de efectuar auditorías anuales, y verificaciones previas por empresas autorizadas, sobre los tanques de almacenamiento con el objeto de verificar su hermeticidad. Estas auditorías serán realizadas por quienes figuren en los registros correspondientes de la autoridad de aplicación.

8.1.7.4 Ley Nacional N° 20.429, Ley Nacional de Armas y Explosivos – Sustitución de la Ley N° 13.945. Decreto Reglamentario Parcial N° 302/1983, sobre Reglamentación Parcial de Pólvoras, Explosivos y Afines

Ley Nacional N° 20.429: Boletín Oficial 5 Julio 1973.

Decreto Reglamentario Parcial N° 302/1983: Boletín Oficial 28 de Febrero de 1983.

La adquisición, uso, tenencia, portación, transmisión por cualquier título, transporte, introducción al país e importación de armas de fuego y de lanzamiento a mano o por cualquier clase de dispositivo, agresivos químicos de toda naturaleza y demás materiales que se clasifiquen como armas de guerra, pólvoras, explosivos afines, y armas, municiones y demás materiales clasificados de uso civil, quedan sujetos en todo el territorio de la Nación a las prescripciones de la presente ley.

En lo relevante, esta norma dispone las obligaciones y condiciones que deberán cumplirse para el transporte, la utilización y almacenamiento de pólvoras, explosivos y afines.

Los importadores, exportadores, fabricantes, usuarios y todo aquel que se dedique al comercio, industrialización y empleo de pólvoras, explosivos y afines, deberán inscribirse en el registro que organizará el Ministerio de Defensa de acuerdo con la reglamentación, la que determinará los requisitos y condiciones de la inscripción y documentación correspondiente.

El almacenamiento de pólvoras, explosivos y afines debe efectuarse en locales previamente autorizados por el Ministerio de Defensa. La reglamentación determinará las condiciones de emplazamiento de los mismos y sus características, la cantidad máxima a depositar en cada uno de ellos, y toda otra exigencia de seguridad y vigilancia.

En lo referente a pólvoras, explosivos y afines la autoridad de aplicación era la Dirección General de Fabricaciones Militares. Por Decreto N° 037/2001 se reasignan

funciones de la Dirección General de Fabricaciones Militares al Ministerio de Defensa “Registro Nacional de Armas” (RENAR).

8.1.7.5 Ley Nacional N° 24.449, Ley de Tránsito, y Decreto Nacional Reglamentario N° 779/1995, Resolución Nacional N° 195/1997. Ley Provincial de Adhesión N° 6.684, Decreto Provincial Reglamentario N° 326/1997 y demás normas reglamentarias

Ley Nacional N° 24.449: Boletín Oficial 10 de Diciembre de 1995.

Decreto Nacional N° 779/1995: Boletín Oficial 29 de Noviembre de 1995.

Ley Provincial N° 6.684/1996: Boletín Oficial 1 de Febrero de 1996.

Decreto Provincial N° 250/06: Boletín Oficial 1 de Marzo de 2006.

Decreto Provincial No. 0618/06: Boletín Oficial 05 de Mayo de 2006.

Resolución Nacional N° 195/1997: Boletín Oficial 29 de Julio de 1997.

La presente normativa establece los principios que regularán el uso de las vías públicas; los requisitos que deberán satisfacer quienes opten por la licencia de conducir; las condiciones de seguridad vial que deberán reunir las vías de tránsito conforme al estándar o tipo de ruta que se trate; la necesidad de obtener las autorizaciones pertinentes para realizar obras en la vía pública. Dispone también que todo vehículo destinado al tránsito deba cumplir las condiciones activas y pasivas, de emisión de contaminantes y condiciones de seguridad que establezca la ley y su reglamentación. Establece, además, las reglas que aplican a los vehículos de transporte.

En forma especial, esta ley hace aplicable la Ley N° 24.051, sobre Residuos Peligrosos, al transporte de sustancias peligrosas, indicado en su Artículo 56° inciso h, que los transportistas, “...*deberán estar previstos de los elementos distintivos y de seguridad reglamentarios, ser conducidos y tripulados por personal con capacitación especializada en el tipo de carga que llevan y ajustarse en lo pertinente a las disposiciones de la Ley N° 24.051*”.

Finalmente, establece los procedimientos a que se ajustarán las infracciones a la presente ley y las sanciones que les serán aplicables a los infractores. Cabe destacar que el Decreto Nacional Reglamentario en su Artículo 56° inc “h” dispone: “*Los transportes de sustancias y residuos peligrosos cumplirán con las disposiciones de la Ley N° 24.051, su reglamentación y con el Reglamento General para el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera, que como anexo S, forma parte de la presente reglamentación*”.

El Reglamento General para el Transporte de Mercadería Peligrosa por Carretera (Anexo S del Decreto Nacional N° 779/1995 con las modificaciones incorporadas

por la Resolución Nacional N° 195/1997), define como sustancias peligrosas aquellas consideradas peligrosas por presentar riesgos para la salud de las personas, para la seguridad pública o para el medio ambiente.

La clasificación de los materiales peligrosos se ha realizado conforme el riesgo que presentan. Las clases de riesgos han sido definidas por la Autoridad de Aplicación en la Resolución N° 195/1997, que incorpora estos conceptos al Decreto Nacional Reglamentario N° 779/1995, Anexo S.

En cuanto al Transporte de Mercancía Peligrosa por vía área o marítima, el Artículo 6° del Decreto Nacional Reglamentario N° 779/1995, establece que el ingreso y egreso de mercancías peligrosas por vía aérea son aceptados si se realizan conforme a las exigencias de la Organización para la Aviación Civil Internacional (OACI) y en el caso de transporte por vía marítima de acuerdo a las exigencias establecidas por la Organización Marítima Internacional (OMI).

Cabe destacar que en la Provincia de San Juan, resulta aplicable la Ley Nacional 24.449; el Decreto Nacional Reglamentario N° 779/95 y sus anexos, es aplicable en forma supletoria en todo aquello que no está expresamente previsto en el Decreto Provincial N° 250/06.

8.1.7.6 Decreto N° 1.544-MOSP y MA/2002, sobre Seguridad y Control de Presas

Publicación en el Boletín Oficial: 9 de Diciembre del 2002.

El Decreto N° 1.544-MOSP y MA/02, publicado en el Boletín Oficial en fecha 9 de Diciembre del 2002, establece como función indelegable del Estado, la de controlar las presas en todas las fases de su existencia física, por intermedio de un organismo técnico especializado. Designando a la Dirección de Recursos Energéticos como Autoridad de Aplicación de la Seguridad y Control de Presas.

Quedan comprendidas dentro del ámbito de este Decreto todas las obras de presas y embalses sean públicos o privados, como así también todo terraplén o estructura para cualquier propósito que de hecho embalse o pueda embalsar cualquier fluido.

Los objetivos de la Autoridad de Aplicación están específicamente detallados y consisten en: a) Instrumentar los mecanismos necesarios para garantizar la seguridad de las presas; b) Ejercer el poder de policía en materia de seguridad de presas en el ámbito de su competencia con las atribuciones y responsabilidades de Autoridad de Aplicación.

Cabe destacar que este Decreto se encuentra integrado por el Reglamento Técnico sobre Seguridad y Control de Presas (Anexo A, el cual establece la normativa técnica a cumplir para la seguridad de las presas).

El Plan de Acción Durante Emergencias (P.A.D.E.) exigido por el Decreto N° 1.544/02 será complementado con el Plan de Emergencia Provincial – Decreto Provincial N° 1.805/00 al tramitarse el permiso sectorial respectivo ante la Dirección Provincial de Recursos Energéticos.

El Plan de Emergencia Provincial (Decreto N° 1.805/00) establece las medidas que están a cargo de los organismos gubernamentales antes, durante y después de concluido un siniestro declarado como emergencia y considera la necesidad de ser complementado entre otros con los planes de autoprotección de empresas industriales y comerciales.

8.1.7.7 Ley Nacional N° 19.587, de Higiene y Seguridad en el Trabajo y el Reglamento Complementario, Decreto N° 351/1979 y sus modificatorias

Ley Nacional N° 19.587: Boletín Oficial 28 Abril de 1972.

Decreto Nacional N° 351/1979: Boletín Oficial 22 de Mayo de 1979.

Decreto Nacional N° 911/1996: Boletín Oficial 14 de Agosto de 1996.

El objeto final de esta normativa es regular las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, cualquiera sea el lugar donde éste se preste o donde éste se desarrolle.

Para efectos del desarrollo de los objetivos generales antes mencionados, son materia de esta regulación los siguientes aspectos:

Prestaciones de medicina y de higiene y seguridad en el trabajo;

Características constructivas de los establecimientos, incluida la provisión de agua potable y desagües industriales;

Condiciones de higiene en los ambientes laborales, entre lo que se considera carga térmica, contaminación ambiental (estándares de calidad que rigen el ambiente laboral); radiaciones, ventilación; iluminación y color; ruidos y vibraciones;

Condiciones de seguridad del establecimiento industrial, entre las que destacan instalaciones eléctricas, máquinas y herramientas, aparatos que puedan desarrollar presión interna, trabajos con riesgos especiales; protección contra incendios;

Protección personal del trabajador;

Capacitación del personal.

Las infracciones a la presente ley y sus reglamentos serán sancionadas por la autoridad nacional o provincial que corresponda, según la Ley N° 18.608, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 18.694.

El Decreto Nacional 911/96 y sus normas complementarias establecen reglas específicas sobre seguridad e higiene para la industria de la construcción, excluyendo para la misma la aplicación del Decreto Reglamentario General 351/79.

8.1.7.8 Ley Nacional N° 24.557/95 sobre Riesgos del Trabajo.

Esta ley regula la prevención de riesgos y la reparación de daños derivados del trabajo, estableciendo en su Artículo 1° los siguientes objetivos:

Reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo.

Reparar los daños derivados de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, incluyendo la rehabilitación del trabajador damnificado.

Promover la recalificación y la recolocación de los trabajadores damnificados.

Promover la negociación colectiva laboral para la mejora de las medidas de prevención y de las prestaciones reparadoras.

8.1.8 Legislación Ambiental Relacionada al Manejo de Residuos

8.1.8.1 Ley Nacional N° 25.612, sobre Gestión Integral de Residuos Industriales y de Actividades de Servicios y Decreto Nacional N° 1.343/2002, de Promulgación Parcial de la Ley

Ley Nacional N° 25.612: Boletín Oficial 27 de Julio del 2002.

Decreto Nacional N° 1.343/2002: Boletín Oficial 29 de Julio del 2002.

La presente ley, establece un régimen integral para el manejo de los residuos generados por la actividad industrial y de servicios en todo el territorio nacional.

Fue dictada conforme a las atribuciones que el Artículo 41° de la Constitución Nacional otorga al Poder Legislativo, es decir, tiene el carácter de presupuesto mínimo para el desarrollo de las legislaciones provinciales.

Considerando el carácter general de la misma, el legislador ha dispuesto que su reglamentación, la cual aún no ha sido dictada. Mientras esta reglamentación no se

dicte, se mantendrán vigentes los registros y anexos que contempla la Ley Nacional N° 24.051 de Residuos Peligrosos. Lo mismo ocurre en relación con la gestión de los residuos patológicos. Posteriormente, cada provincia deberá reglamentar la aplicación local de la misma, para implementar y desarrollar las instituciones dispuestas por ley.

De acuerdo a la ley, se entiende por proceso industrial, toda actividad, procedimiento, desarrollo u operación de conservación, reparación o transformación en su forma, esencia, calidad o cantidad de una materia prima o material para la obtención de un producto final mediante la utilización de métodos industriales.

Conforme a la definición precedente, los residuos generados como parte de las actividades extractivas de una faena minera estarían exentos de esta regulación, no obstante, todo residuo generado como consecuencia de la actividad de beneficio y/o procesamiento del mineral quedaría comprendido dentro del concepto residuo industrial. Este concepto, en virtud del Artículo 2° es ampliado a toda descarga o derrame accidental o derivado de una emergencia o contingencia. En efecto, el texto dice *“se entiende por residuo industrial a cualquier elemento, sustancia y objeto en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso, obtenido como resultado de un proceso industrial, por la realización de una actividad de servicio o por estar relacionado directa o indirectamente con la actividad, incluyendo eventuales emergencias o accidentes, del cual su poseedor productor o generador no pueda utilizarlo, se desprenda o tenga la obligación legal de hacerlo”*.

La ley comprende el manejo de los residuos desde la generación de los mismos hasta la disposición final de éstos y es comprensiva de todos los residuos generados por una actividad industrial y de servicios, independientemente del estado físico en el cual se generen, no obstante quedan expresamente excluidos de este régimen los residuos biopatogénicos, residuos domiciliarios, residuos radiactivos y los residuos derivados de las operaciones normales de buques y aeronaves.

El objetivo de la ley es el manejo integral de los residuos. En virtud de lo anterior fuerza una política de gestión integral obligando al generador, en primer término, a adoptar medidas de minimización y, en el evento que esto no sea factible lo obliga a gestionar los residuos en base a criterios de tolerancia entre residuos (lo que fuerza la segregación de los mismos cuando ello sea requerido dadas las características de peligrosidad de los residuos); identificación de envases y residuos; tratamiento y disposición final con preferencia in situ, sólo en el evento que ello no sea factible podrá hacerlo a través del servicio prestado por terceros; al establecimiento de un sistema de registro y la obligación de mantener permanentemente informada a la autoridad, a través de una declaración jurada que contenga los datos identificatorios y

las características de los residuos industriales, como así también los procesos que los generan.

Respecto al tratamiento y disposición final de los residuos, la ley establece que las condiciones técnicas mínimas que deberán satisfacer estas instalaciones estarán sujetas a la reglamentación que se dicte al efecto. Para ello distingue plantas de tratamiento y plantas de disposición final. Como regla general no se aceptarán depósitos transitorios.

Así también establece que toda planta de almacenamiento, tratamiento o disposición final de residuos, previo a su habilitación, deberá realizar un Estudio de Impacto Ambiental, el cual será presentado ante la autoridad competente, la que emitirá una Declaración de Impacto Ambiental.

Finalmente, señala que estas instalaciones deberán llevar un registro de sus operaciones y que esta información se integrará al Sistema de Información Integrado (este es un instrumento de gestión ambiental que contempla la Ley General de Medio Ambiente).

La autoridad de aplicación es aquella que le corresponde al área con competencia ambiental que determine el Poder Ejecutivo.

8.1.8.2 Ley Nacional N° 25.916, sobre Gestión de Residuos Domiciliarios y Decreto Nacional N° 1.158/2004, de Promulgación Parcial de la Ley

Ley Nacional N° 25.916: Boletín Oficial 7 de Septiembre del 2004.

Decreto Nacional N° 1.343/2002: Boletín Oficial 7 de Septiembre del 2004.

Esta ley establece los presupuestos mínimos para la gestión integral de residuos domiciliarios, en el marco del mandato constitucional establecido en el Artículo 41° de la Constitución Nacional. De lo cual se desprende que deberá adecuarse a estos presupuestos mínimos toda la legislación existente en materia de residuos domiciliarios ya existentes a nivel nacional, provincial y/o municipal.

La Ley N° 25.916 define a los residuos domiciliarios como elementos, objetos o sustancias que los humanos desechan o abandonan y no están regulados por normas específicas, pero circunscribe su mandato a los de origen residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial o institucional que son la mayor parte de los orígenes posibles.

Prevé la gestión de los residuos domiciliarios abarcando todo el proceso comprendido entre la generación y su disposición final, pasando por la disposición

inicial, general o selectiva, la recolección, transferencia y transporte y su procesamiento o tratamiento.

La ley establece una clara política ambiental en relación con los lugares destinados a la disposición permanente de los residuos domiciliarios, denominados “centros de disposición final”. A tal fin establece que estos lugares deberán contar con un Evaluación de Impacto Ambiental, que contemple la ejecución de un Plan de Monitoreo de las principales variables ambientales durante las fases de operación, clausura y postclausura. Asimismo dispone que los mismos deben ubicarse en sitios suficientemente alejados de áreas urbanas, de manera tal de no afecten la calidad de vida de la población; y su emplazamiento debe determinarse considerando la planificación territorial, el uso del suelo y la expansión urbana durante un lapso que incluya el período de postclausura. De la misma manera, está vedada su ubicación dentro de áreas protegidas o sitios que contengan elementos significativos del patrimonio natural y cultural o en lugares inundables.

Establece que las autoridades de aplicación de la presente ley son aquellas correspondientes a cada una de las jurisdicciones locales.

A nivel nacional, establece un sistema de coordinación interjurisdiccional, cuyo coordinador es el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), el cual tiene a su cargo lograr los objetivos de la ley en todo el territorio nacional.

8.1.8.3 Ley Nacional N° 23.992, Ratificación del Convenio de Basilea

Publicación en el Boletín Oficial: 28 de Octubre de 1991.

Mediante esta ley, el Congreso Nacional ratifica la firma del Convenio de Basilea por parte del Poder Ejecutivo Nacional.

Este convenio regula el movimiento transfronterizo de los desechos peligrosos y su eliminación. El objetivo del Convenio es limitar el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos, por ello la prohibición establecida para este movimiento no es absoluta sino parcial al establecer los procedimientos a través de los cuales los países podrán realizar la exportación e importación de un país a otro.

Cabe recordar que la Constitución Nacional prohíbe en su Artículo 41° el ingreso de residuos peligrosos al territorio nacional.

8.1.8.4 Ley Nacional N° 25.670, Presupuestos Mínimos Para La Gestión y Eliminación de los P.C.B.

Publicación en el Boletín Oficial: 19 de Noviembre del 2002.

Mediante esta ley se establecen los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los bifenilos Policlorados (PCBs), en todo el territorio de la Nación conforme lo ha establecido el Artículo 41° de la Constitución Nacional.

Son objetivos de la misma, fiscalizar las operaciones asociadas a los PCBs, procurar la descontaminación o eliminación de aparatos que lo contengan, eliminar los PCBs usados, prohibir su ingreso al país, como así también su producción y comercialización.

La Ley ha establecido como presunciones, salvo prueba en contrario, que el PCBs usado es cosa riesgosa en los términos del Artículo 1.113° del Código Civil y que el daño causado por los mismos es equivalente al causado por un residuo peligroso. También se establece que los PCBs continúan alcanzados por la normativa específica de residuos peligrosos.

Entiéndase por PCBs a los: policloroterfenilos (PCT), el monometiltetraclorodifenilmetano, el monometildiclorodifenilmetano, el monometildibromodifenilmetano, y a cualquier mezcla cuyo contenido total de cualquiera de las sustancias anteriormente mencionadas sea superior al 0,005% en peso (50 ppm).

8.1.8.5 Ley Nacional N° 24.051, sobre Residuos Peligrosos y Decreto Reglamentario Nacional N° 831/1993. Ley Provincial de Adhesión N° 6.665

Ley Nacional N° 24.051: Boletín Oficial 17 de Diciembre de 1991.

Decreto Reglamentario Nacional N° 831/1993: Boletín Oficial 3 de Mayo de 1993.

Ley Provincial N° 6.665: Boletín Oficial 11 de Enero de 1996.

La Ley N° 24.051 de Residuos Peligrosos se encuentra vigente desde Enero de 1992. Contiene normas de tutela ambiental en lo relativo a los residuos peligrosos. Toda su normativa está referida a la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de los llamados “residuos peligrosos”.

Según el Artículo 2° de la ley “será considerado residuo peligroso, a los efectos de esta ley, todo residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.”

En particular serán considerados peligrosos los residuos indicados en el Anexo I o que posean alguna de las características enumeradas en el Anexo II.

Las disposiciones de la presente serán también de aplicación a aquellos residuos peligrosos que pudieren constituirse en insumos para otros procesos industriales.

Quedan excluidos de los alcances de esta ley los residuos domiciliarios, los radioactivos y los derivados de las operaciones normales de los buques, los que se regirán por leyes especiales y convenios internacionales vigentes en la materia.

Según el Artículo 3° de la ley “Prohíbese la importación, introducción y transporte de todo tipo de residuos provenientes de otros países al territorio nacional y sus espacios aéreos y marítimo”. Conforme a lo establecido en el Artículo 3° del Reglamento N° 831 de 1993, Reglamentación de la Ley N° 24.051, quedan comprendidos en esta prohibición, aquellos productos procedentes de reciclados o recuperación material de residuos que no sean acompañados de un certificado de inocuidad sanitaria y/o ambiental, según el caso, expedido previo al embarque por la autoridad competente del país de origen, y ratificado por la Autoridad de Aplicación, previo al desembarco. Cuando existieren dudas de la Administración Nacional de Aduanas acerca de la categorización o caracterización de un residuo, serán giradas las actuaciones a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano, a los efectos de que ésta se expida mediante acto expreso en un plazo no superior a diez (10) días hábiles contados desde su recepción.

Esta ley prevé la apertura de registros de generadores y operadores de residuos peligrosos, en ellos deberán inscribirse las personas físicas o jurídicas responsables de la generación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.

La Provincia de San Juan se encuentra adherida a esta norma por Ley Provincial N° 6.665 y por lo tanto la misma resulta aplicable en todo el territorio provincial, no así su decreto reglamentario el cual resultará aplicable, conforme el ámbito descrito supra.

En virtud de la Ley Provincial de Adhesión N° 6.665, la autoridad de aplicación en la Provincia de San Juan en materia de residuos peligrosos es la Dirección de Política Ambiental (hoy Subsecretaría de Medio Ambiente) o la autoridad que ostente la mayor jerarquía provincial en relación al ambiente. Además pone en ejecución el Registro Provincial de Generadores, Operadores y Transportistas de Sustancias. En este registro se inscribirán las personas responsables de la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos en la Provincia de

San Juan. Finalmente, prohíbe la importación, introducción y transporte de todo tipo de residuos peligrosos al territorio provincial.

8.1.8.6 Ley Provincial N° 7.375, modificada por Ley Provincial N° 7.396, sobre Residuos Sólidos y Urbanos, Vertederos Controlados

Ley Provincial N° 7.375: Boletín Oficial 15 de Julio de 2003.

Ley Provincial N° 7.396: Boletín Oficial el 29/07/03.

La presente ley tiene por finalidad promover el ordenamiento de la recolección y tratamiento de residuos sólidos urbanos, con la finalidad de evitar la contaminación, propiciar la protección del entorno ambiental físico y social y garantizar condiciones mínimas igualitarias ambientales a todos los habitantes del territorio de la Provincia de San Juan, determinando las responsabilidades jurisdiccionales del Gobierno Provincial y de los municipios de la Provincia. Además establece normas de aplicación para la autorización de vertederos controlados o rellenos sanitarios y prevé sanciones para el caso de incumplimientos a esta norma.

A los fines de su interpretación es importante considerar que lo establecido en esta ley, es complementario a las disposiciones de carácter especial referentes a residuos radioactivos, aguas residuales, productos tóxicos contaminantes o peligrosos o cualquier otra clase de excretas que se rijan por disposiciones especiales.

La ley establece que el almacenamiento, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos será responsabilidad conjunta del Gobierno Provincial y de los municipios según lo establecido por la Constitución Provincial, el Código Sanitario Provincial, las Cartas Orgánicas Municipales, la Ley Orgánica Municipal y sus modificaciones y la legislación vigente complementaria.

Además dispone que los generadores o poseedores de residuos, podrán conservarlos adecuadamente o constituir, individual o colectivamente, sus propios depósitos o vertederos, así como proceder a su tratamiento, previa obtención de la autorización municipal de acuerdo con lo establecido en la presente ley y lo que disponga la Dirección de Política Ambiental u organismo gubernamental que la reemplace. Para el caso específico de los proyectos mineros se deberá considerar la competencia en la materia del Departamento de Minería.

En cuanto a los vertederos controlados o rellenos sanitarios establece que los proyectos para el emplazamiento y construcción, deberán realizarse en el lugar apropiado, de acuerdo a las exigencias del Municipio de jurisdicción donde se halle ubicado y cumplimentar los requisitos establecidos por la Ley Provincial N° 6.571 de Evaluación de Impacto Ambiental, modificada por Ley Provincial N° 6.800.

Si la naturaleza o ubicación del vertedero, estuviera relacionada o pudiera afectar la competencia de otros organismos, la autoridad competente podrá recabar informes de los mismos y solicitará la correspondiente declaración de impacto ambiental que contempla la Ley Provincial N° 6.571, modificada por la Ley Provincial N° 6.800.

8.1.9 Legislación Relacionada al Manejo de Contingencias

8.1.9.1 Ley Provincial N° 6.837, y modificatoria Ley Provincial N° 6904.

Decreto Reglamentario N° 1476-MG-2000, sobre Régimen de Defensa Civil en coincidencia con lo establecido en la Ley Nacional N° 24.059 y normas reglamentarias de Seguridad Interior

Ley Provincial N° 6.837: Boletín Oficial el 09 de Enero de 1998.

Ley Provincial N° 6.904: Boletín Oficial 4 de Enero de 1999.

Decreto Reglamentario N° 1.476-MG-2000: Boletín Oficial 2 de Octubre de 2000.

La presente ley tiene por objeto atender a las necesidades anteriores y emergentes de estados de emergencia producto de fenómenos naturales o de la acción de personas, que se canalizarán a través de Defensa Civil.

La misma ley entiende por Defensa Civil, al conjunto de medidas y actividades no agresivas tendientes a evitar, anular o disminuir los efectos que los agentes de la naturaleza o cualquier desastre de otro origen, puedan provocar sobre la población y sus bienes y a contribuir a restablecer el ritmo normal de vida de la zona afectada.

La norma prohíbe expresamente, en todo el territorio de la Provincia, la creación de organismos o entidades que se arroguen las funciones y tareas que establece la presente ley, así como las que tengan por finalidad desarrollar actividades que impliquen una suplantación o superposición de la misión que compete a las autoridades de Defensa Civil.

Dispone que el Gobernador de la Provincia tendrá a su cargo la planificación, organización, promoción, coordinación, control y dirección de la Defensa Civil y, eventualmente, la conducción de las operaciones de emergencia dentro del ámbito provincial, pudiendo eventualmente delegar esta función.

Si bien la ley expresamente no lo contempla, consideramos que de producirse un evento de naturaleza tal que por razón de agentes de la naturaleza o cualquier desastre de otro origen, puedan llegar a provocar daños o posibles estados de emergencia que afecten a la población y sus bienes, se deberá notificar por escrito dicho acontecimiento a la oficina de Defensa Civil, y al Intendente Municipal, del lugar donde se hubiera producido el evento, a fin de poner en funcionamiento el

esquema previsto en la norma, prestando en este caso toda la colaboración necesaria para restablecer el ritmo normal de vida de la zona afectada.

8.1.9.2 Ley Provincial N° 7.055. Aprobación del Convenio Marco de Asistencia y Cooperación Recíproca entre El Gobierno de la Provincia de San Juan y Gendarmería Nacional - Agrupación X San Juan

Publicación en el Boletín Oficial: 6 de Septiembre del 2000.

Por medio de esta ley se aprueba el Convenio Marco de Asistencia y Cooperación Recíproca firmado entre Gendarmería Nacional - Agrupación X San Juan, y el Gobierno de la Provincia de San Juan, el cual fuera aprobado previamente por Decreto N° 874/2000.

Este convenio tiene por objeto coordinar esfuerzos entre las partes en materia de:

Control de tránsito, tendiente a disminuir los índices de lesiones, muerte o incapacidades, y perjuicios económicos y sociales para la comunidad;

Apoyo a la actividad minera, arbitrar todos los medios necesarios para la ejecución e instrumentación de planes y programas conjuntos destinados a la asistencia y apoyo de la actividad minera y otros puntos vinculados a ella, primordialmente en lo que respecta a casos de catástrofes naturales u otros fenómenos naturales, la protección del medio ambiente, la seguridad, poder de policía, conservación del patrimonio natural y cultural frente a actividad minera.

Lograr una efectiva interacción en la protección de los recursos arqueopaleontológicos,

Lucha contra los delitos ecológicos;

Acciones concomitantes de Sanidad Vegetal tendiente al control y erradicación de la mosca de los frutos.

Siendo intención de ambas partes de promover la colaboración mutua y la coordinación de acciones de Defensa Civil.

Con el objetivo de implementar acciones conjuntas en relación a los objetivos enunciados ambas partes se obligan a disponer de los medios y recursos humanos que les son propios, dentro de sus posibilidades.

Se establece que el convenio tiene vigencia, mientras cualquiera de las partes no manifieste su voluntad en contrario, a cuyo efecto deberá comunicarlo de manera

fehaciente a la otra, con una antelación mínima de sesenta días hábiles. Además se dispone que las acciones a implementar se determinen por actas complementarias.

8.2 CRITERIOS O ESTÁNDARES TÉCNICOS APLICABLES AL PROYECTO

8.2.1 Calidad del Aire y Emisiones

Los estándares de calidad del aire vigente en la Argentina para la actividad minera están establecidos en el Anexo IV de las Normas Complementarias de la Ley N° 24.585, los cuales se adjuntan en la Tabla 8.1.

8.2.2 Recursos Hídricos

Los estándares de calidad del agua y de efluentes vigente en la Argentina para la actividad minera están establecidos en el Anexo IV de las Normas Complementarias de la Ley N° 24.585 y se presentan en la Tabla 8.2. Esta norma establece los estándares distinguiendo los distintos usos que el recurso puede tener.

Adicionalmente, hemos incorporado como referencia, en la Tabla 8.3, las normas de calidad para descargas de efluentes industriales contenidas en el Decreto Provincial N° 638/89 modificado por el Decreto Provincial N° 2.107/2006.

8.2.3 Calidad del Suelo

Conforme a lo establecido en el Anexo IV de las Normas Complementarias de la Ley N° 24.585, en la Tabla 8.4 se identifican los estándares de calidad de suelo según su uso.

8.2.4 Hábitat, Flora y Fauna

Como regla general, el Banco Mundial no acepta que los hábitats naturales sean afectados significativamente por un proyecto. Las excepciones a esta regla general son:

- Que no haya alternativas factibles.
- Que la evaluación ambiental demuestre que los beneficios son substancialmente más relevantes que los costos.
- Que el proyecto contemple medidas de compensación, las que debieran incluir el apoyo a una o más áreas protegidas, ecológicamente similares a los hábitats naturales afectados adversamente por el proyecto y ninguna más pequeña que la afectada.

La regla general se torna absoluta cuando el impacto implica la conversión o degradación de hábitats naturales críticos. Esto incluye áreas protegidas y áreas o recursos asociados o relacionados (tales como fuentes de agua), de las cuales depende el área protegida.

8.2.5 Recursos Patrimoniales

La recomendación del Banco Mundial es la conservación y preservación de los recursos con valor patrimonial.

8.2.6 Ruido y Vibraciones

Argentina no cuenta con normativa específica sobre la materia, y en consideración que el ruido sobre comunidades estará relacionado al tránsito de vehículos a través de vías públicas, para la evaluación del impacto por la generación de ruido, se han adoptado los criterios que establece el Departamento de Vialidad de los Estados Unidos (USDOT). Estos criterios, que se relacionan con el incremento del Nivel de Presión Sonoro (NPS), se resumen en la Tabla 8.5-1.

El uso de estas guías ha permitido valorar los efectos del Proyecto, en términos del nivel o grado de significancia.

En cuanto al ruido ambiental, a fin de valorar los efectos del proyecto se ha usado como referencia los criterios que ha establecido el Banco Mundial en su Guías Generales para la Protección del Medio Ambiente (1998), los que se muestran en la tabla 8.5-2.

Respecto a las vibraciones, se ha usado como referencia los valores establecidos en la norma alemana DIN 4150:1999, los que se muestran en la tabla 8.6.

8.2.7 Residuos Sólidos

El Banco Mundial, respecto de los residuos sólidos al interior de una faena minera o de cualquier establecimiento industrial, recomienda que el titular del proyecto sea responsable de su manejo desde el origen de los mismos hasta su disposición final. Lo anterior no importa la responsabilidad directa sobre cada una de las acciones que comprende el manejo de los residuos, sino que la responsabilidad en el sentido que éstas se lleven a cabo en forma técnicamente adecuada y ajustadas a las normas nacionales vigentes.

Respecto de los residuos mineros, se recomienda desviar y manejar adecuadamente los lixiviados de depósitos de estériles para evitar el contacto y contaminación de masas de aguas superficiales (incluidas las escorrentías) y subterráneas.